

Los cambios que afectan a la propuesta anticipada de convenio (*)

Juan Sánchez-Calero (**)

EXTRACTO

La Ley Concursal de 2003 introdujo la propuesta anticipada de convenio con la finalidad de facilitar la tramitación del concurso. Sin embargo, la realidad judicial demuestra un ínfimo uso de esa solución. Este artículo enuncia las modificaciones introducidas por el Real Decreto-Ley 3/2009 en esta materia, orientadas a recuperar la utilidad de la propuesta anticipada.

PALABRAS CLAVE

Ley Concursal, propuesta anticipada de convenio, Real Decreto-Ley 3/2009

ABSTRACT

The Insolvency Act 2003 adopted the advanced agreement trying to ease the bankruptcy proceeding. However, the judicial reality shows a very low use of that solution. This paper presents the changes adopted by the Real Decreto-Ley 3/2009 in this issue, in order to recover the use of the advance agreement.

KEY WORDS

Insolvency Act, advance agreement proposal, Real Decreto-Ley 3/2009

(*) Intervención en la Jornada “*La reforma de la Ley Concursal: Real Decreto-Ley 3/2009*”, celebrada el 13 de mayo de 2009, organizada por el Departamento de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense, promovida por la Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal y con la colaboración del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, del Registro de Economistas Forenses y de la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE).

(**) Catedrático de Derecho Mercantil
Departamento de Derecho Mercantil. Facultad de Derecho.
Universidad Complutense.
Ciudad Universitaria s/n.
28040 Madrid
00 34 -913 94 54 93
jscalero@der.ucm.es
<http://www.ucm.es/centros/webs/d321/>

SUMARIO:

Introducción	3
De lo “viejo” a lo nuevo: la evidencia del fracaso	3
La ampliación de la legitimación para presentar propuesta anticipada de convenio	6
La nueva fase preconcursal de adhesiones a la propuesta anticipada	7
La ampliación del plazo para cumplir con el deber de solicitar la declaración de concurso	8
Refinanciación y propuesta anticipada	10
La reducción de las adhesiones a la propuesta anticipada que se acompaña a la solicitud del concurso	11
La ampliación del pasivo que autoriza adhesiones a la propuesta anticipada	12
Los efectos frente a los acreedores de la comunicación por el deudor de la negociación preconcursal	13
La comunicación del art. 5.3 LC como solicitud de concurso voluntario	14
Conclusión	14
Bibliografía específica sobre la propuesta anticipada de convenio	15

Introducción

1. Es para mí un motivo de especial satisfacción poder participar en esta Jornada sobre la reforma urgente de nuestra Ley Concursal (LC). Es un gran acierto de nuestro Departamento reaccionar con celeridad y fomentar el debate sobre la reciente (y parece que penúltima) reforma concursal, consiguiendo el apoyo de organizadores y patrocinadores tan cualificados como los que hacen posible esta reunión. Una reunión que permite recorrer, a través del diverso origen de los intervinientes, los diversos puntos de vista de la legislación concursal en su formación y aplicación. Mi felicitación a nuestro Director, el Profesor Gaudencio Esteban y también a la Profesora Juana Pulgar, principal impulsora de esta iniciativa.
2. Se me ha asignado una breve reflexión sobre los cambios que afectan a la propuesta anticipada de convenio. Son varios, de diversa relevancia y de inmediato los concretaré. Antes de hacerlo creo obligado analizar la pertinencia de la reforma en este punto. El Preámbulo del Real Decreto-Ley 3/2009 indica que la reforma se acometió sobre *“aquellos aspectos concretos cuyo tratamiento normativo se ha revelado más inconveniente”*. Con ello se apunta a una premisa del correcto enjuiciamiento de toda reforma normativa. Antes que describir lo que llega, procede revisar lo que había y determinar lo que ha fallado, si es que estamos ante un fallo. Debemos preguntarnos si –como indica la norma reformista- la regulación del convenio anticipado no era conveniente, lo que interpreto como una incapacidad para cumplir la finalidad que la Ley Concursal le atribuía.

De lo “viejo” a lo nuevo: la evidencia de un fracaso

3. Recordaré, con ese afán de determinar el acierto de la reforma a partir de lo que se cambia, lo que decía la Exposición de Motivos de la LC al respecto, tras describir el

convenio como la solución normal del concurso: *“Entre las medidas para facilitar esta solución del concurso destaca la admisión de la propuesta anticipada de convenio que el deudor puede presentar con la propia solicitud de concurso voluntario o, incluso, cuando se trate de concurso necesario, hasta la expiración del plazo de comunicación de créditos, siempre que vaya acompañada de adhesiones de acreedores en el porcentaje que la Ley establece. La regulación de esta propuesta anticipada permite, incluso, la aprobación judicial del convenio durante la fase común del concurso, con una notoria economía de tiempo y de gastos respecto de los actuales procedimientos concursales”*. En suma, estábamos ante una medida destinada a simplificar o agilizar un procedimiento de naturaleza compleja. Sustancialmente, por medio del reconocimiento de la posibilidad de anticipar la fase de adhesión al convenio y su consiguiente aprobación. Esto explica que la propuesta anticipada fuera objeto de una elogiada recepción por parte de nuestra doctrina.

4. El siguiente paso de esta reflexión nos lleva necesariamente a la realidad económica con respecto a la que iba encaminada la medida legal. Son los datos que nos permitirán constatar el mayor o menor fundamento del optimismo con el que el legislador justificaba y la doctrina recibía la propuesta anticipada. La información estadística¹ sobre la utilización de la propuesta anticipada de convenio es la siguiente:

Año	2005	2006	2007	2008	2009 (1er T)
Concursos	929	906	976	2902	1558
Propuesta anticipada	17	4	5	5	4

¹ Cuadro elaborado a partir de la información disponible en www.ine.es

5. Esos datos no autorizan a formular opiniones, sino a reconocer una evidencia: el convenio anticipado ha fracasado de forma rotunda, produciéndose además una evolución sorprendente en cuanto a su utilización. Me refiero a que lo que en algún otro lugar he llamado la *“avalancha concursal”* iniciada en 2008 y que continúa en 2009 –al haberse más que triplicado el número de concursos- no se ha visto acompañada por el correspondiente aumento de las propuestas anticipadas de convenio que han quedado como una suerte que podíamos calificar como anecdótica. Se responde así la primera pregunta de la que debe partir la valoración de la reforma: la aplicación de la legislación anterior arroja un resultado decepcionante, con lo que cobra pleno fundamento intentar nuevas vías para animar al uso de la propuesta anticipada de convenio. Esa solución normativa puede decirse, con todo rigor, que hasta ahora ha resultado inconveniente.
6. ¿Por qué esa inconveniencia? Los propios deudores parecen haber considerado, sin duda, que antes que una ventaja, estaban ante un obstáculo cara a la iniciación y tramitación del concurso o, incluso, estimar que acogerse a la propuesta anticipada pudiera implicar un estricto perjuicio. Es cierto que anunciar que no existía en nuestra tradición empresarial una especial propensión a contribuir al saneamiento de un deudor. Recuérdese que las adhesiones a las propuestas anticipadas debían partir de los acreedores ordinarios. Es frecuente que cuando el deudor anuncia a uno de sus acreedores que está estudiando la solicitud concursal, la primera preocupación de su acreedor sea la puesta al día de la deuda, la obtención de ventajas frente a otros acreedores, el reforzamiento de garantías o, simplemente, no volver a trabajar con ese deudor que ha desvelado de buena fe su posible insolvencia con vistas a obtener el apoyo de ese y otros acreedores.
7. No parece que nuestra tradición concursal (la judicial en concreto) esté especialmente orientada hacia la solución convencional del concurso. Siendo cierto que poco impulso encuentra esa solución en la tendencia a la dilación de los procedimientos concursales por la carga de trabajo que soportan los órganos competentes, pienso que tiene mayor influencia la falta de disposición de muchas

empresas a contribuir con su adhesión a una propuesta anticipada, como factor de posible recuperación de una empresa insolvente. La inminencia del concurso sigue operando como un estigma sobre el deudor, que impulsa a sus acreedores a preferir soluciones individuales o a alejarse de aquel, antes que contribuir a una solución colectiva. Las anteriores son meras reflexiones sin un sólido respaldo empírico, pero creo que pueden sostenerse a partir del escaso éxito del convenio concursal. Lejos de ser la solución normal que la Ley pretendía, el convenio es una culminación del concurso cada vez más difícil.

La ampliación de la legitimación para presentar propuesta anticipada de convenio

8. La concepción originaria de la posibilidad de presentar la propuesta anticipada de convenio apuntaba a una suerte de estímulo o privilegio reservado a favor de determinados deudores que, por decirlo de una manera simple, eran insolventes a pesar de una llevanza ordenada de su actividad empresarial y de un comportamiento correcto en las relaciones frente a sus acreedores, mediante el cumplimiento de sus deberes legales. Esto se reflejaba especialmente en el amplio catálogo de prohibiciones para la presentación de dicha propuesta, que aparecía vedada a aquellos deudores infractores de los deberes básicos de todo empresario o autores de actos lesivos para sus acreedores.
9. Frente a esas prohibiciones legales que venían a suponer una suerte de contrapartida al beneficio que pudiera implicar la propuesta anticipada de convenio, pudiera argumentarse que la norma así diseñada terminaba perjudicando a todos los interesados en la insolvencia de aquel deudor y en su posible solución por medio de un concurso. El principal asidero de esa visión crítica de las prohibiciones legales se encuentra en que la solución convencional del concurso no estaba condicionada por ninguna circunstancia subjetiva del deudor similar a las que enunciaba el art. 105 LC. Pudiera decirse en esa línea que el mero hecho de poder anticipar una propuesta no debiera tener en la solución convenida del concurso un régimen tan diferenciado con respecto al general.

10. De esta manera, el incentivo para un mayor uso de la propuesta anticipada lo encontramos en la solución, aparentemente sencilla, de ampliar los deudores que están legitimados para plantearla. Esto no se hace con una ampliación de los sujetos legitimados (sólo el deudor ostenta esa facultad) sino modificando la norma y reduciendo las circunstancias que prohibían su presentación. El art. 105 establecía hasta seis casos en los que se prohibía recurrir a la propuesta anticipada de convenio. El nuevo art. 105.1 simplifica extraordinariamente ese catálogo de prohibiciones y las reduce a dos, coincidentes con los antiguos apartados 1º y 2º del citado artículo. A partir de ahora no podrá presentar propuesta anticipada de convenio quien hubiere sido condenado en sentencia firme por delitos económicos o contra los trabajadores y tampoco podrá hacerlo quien hubiere incumplido en los tres últimos ejercicios la obligación de presentación de cuentas anuales. Se suprimen las otras causas de prohibición, lo que amplía el grupo de deudores que pueden beneficiarse de la posibilidad de tramitación de una propuesta anticipada de convenio.

La nueva fase preconcursal de adhesiones a la propuesta anticipada

11. El Real Decreto-Ley 3/2009 adopta una medida de naturaleza preconcursal y que es, en mi opinión, la que tiene una mayor trascendencia. Se trata de la adición al art. 5, que regula el deber de solicitar la declaración de concurso, de un nuevo apartado 3. Digo que es una medida preconcursal por cuanto se centra en una posible actuación que se permite al deudor en la fase previa a la solicitud de declaración del concurso y que, además, tendrá efectos positivos si finalmente el concurso llega a producirse. El art. 5.3 dispensa de solicitar la declaración de concurso en el plazo establecido en el apartado 2 a quien, a pesar de estar en una situación de insolvencia actual, ya haya iniciado negociaciones con sus acreedores para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio. Con esta novedad se facilita la preparación del concurso. El deudor dispone de un mayor

margen para conseguir unas adhesiones que, de ser obtenidas, permitirán realmente que la posterior tramitación del concurso se vea impulsada favorablemente por la conformidad ya manifestada por un número relevante de acreedores o, cuando menos, por el titular de un porcentaje significativo de su pasivo.

12. El art. 5.3 lleva a cabo, de hecho, una atenuación del rigor del deber de solicitar la declaración de concurso. Un deber cuya inobservancia tiene, como sabemos, consecuencias particularmente severas para el deudor en el marco de la calificación (v. art.165.1º LC). Mientras que bajo el sistema anterior el plazo máximo era de dos meses, la introducción de este plazo preconcursal para la recolección de adhesiones amplía sensiblemente el tiempo que puede transcurrir desde que el deudor es consciente de que se encuentra en situación de insolvencia actual, de un lado, y la fecha en la que finalmente deberá llegar a producirse la declaración concursal con los consiguientes efectos.

La ampliación del plazo para cumplir con el deber de solicitar la declaración de concurso

13. Para entender la ampliación del plazo que conlleva el nuevo art. 5.3 LC es preciso tomar en consideración tres hechos vinculados entre sí y que deben sucederse en esa fase preconcursal y preparatoria de la solicitud de declaración del concurso.
14. En primer lugar, el nuevo art. 5.3 parte de una situación de insolvencia actual, como presupuesto objetivo del concurso, y toma en cuenta los dos meses que establece con carácter general el art. 5.1 como plazo dentro del que solicitar la declaración de concurso. Bajo la nueva regulación, esos dos meses no obligan de manera indefectible a presentar tal solicitud, sino que aquél deudor que entienda que le interesa hacerlo, podrá dentro de ese plazo comunicar al Juzgado un hecho que depende de su propia voluntad y que no es otro que la iniciación de

negociaciones con sus acreedores para alcanzar las adhesiones necesarias para presentar una propuesta anticipada de convenio. Esto significa que desde el momento en que el deudor conoció o debió haber conocido su estado de insolvencia, cuenta con dos meses para comenzar a negociar con sus acreedores tales adhesiones y así notificarlo al Juzgado con el efecto dilatorio inmediato para la declaración concursal.

15. Llegamos al segundo hecho que viene constituido por la que podríamos denominar fase de obtención de adhesiones. Esta fase se inicia desde la comunicación al Juzgado que de manera innovadora regula el art. 5.3. Debo subrayar que no es un plazo que comienza en función de una resolución judicial, aunque sea de mera ordenación, sino que del art. 5.3 se deduce que es la simple presentación de la comunicación la fecha inicial del cómputo de esos tres meses.
16. El tercer hecho consiste en la solicitud de declaración del concurso. El art. 5.3 exige del deudor que presente esa solicitud en cualquiera de los supuestos, es decir, habiendo o no alcanzado un número suficiente de adhesiones de acreedores a la propuesta anticipada de convenio. Sucede, sin embargo, que ese deber ahora ya inaplazable, debe ser cumplido en un nuevo plazo que se concede al deudor, por término de un mes y cuyo cómputo comenzará a partir de la fecha en que se hayan cumplido los tres meses para adhesiones de los acreedores.
17. Todo lo cual conduce a que mientras que bajo el sistema inicial de la Ley Concursal el deber de solicitar la declaración de concurso tenía que producirse en el plazo único de dos meses, ahora pueden transcurrir hasta seis meses (2 + 3 + 1) desde que se conoce la situación de insolvencia y hasta que se presenta la solicitud de concurso.
18. El nuevo sistema ha partido previsiblemente de la consideración de las dificultades que plantea en una situación de insolvencia actual que los acreedores respalden una propuesta de convenio. Ahora el deudor dispondrá de un mayor tiempo

durante el que poder atraer a acreedores titulares de un determinado porcentaje del pasivo.

Refinanciación y propuesta anticipada

19. Una primera aproximación al art. 5.3 LC plantea dudas de calado en torno a lo que podríamos llamar la relación existente en la fase preconcursal entre la negociación con los acreedores destinada a aprobar la refinanciación de la deuda y la solicitud a esos mismos acreedores de adhesiones para una futura propuesta de convenio. Nos encontramos en un terreno delicado, puesto que el presupuesto del art. 5.3 LC es, como es notorio, el estado de insolvencia actual del deudor y la culminación de la fase de adhesiones que allí se establece parece ser necesariamente la solicitud de concurso (*“haya o no alcanzado las adhesiones necesarias para la admisión a trámite de la propuesta anticipada”*).

20. El tránsito normal concluirá con una situación de previsible insolvencia desde un proceso de refinanciación fracasado, a la apertura de esa fase de adhesiones con la vista puesta en un concurso ineludible. Sin perjuicio de ello, podemos plantearnos un recorrido inverso. No puede descartarse que en la negociación de esas adhesiones con los acreedores se pueda alcanzar un acuerdo que llegue a cuestionar la persistencia de la situación de insolvencia. Lo que se plantea es si realizada la comunicación y gestionadas las adhesiones de los acreedores, éstas alcancen un grado tal que puedan llevar a convertir esa fase en una especie de refinanciación que, de culminar con éxito, diluya la situación de insolvencia y, por lo tanto, el deber de solicitar el concurso. Pensemos, por ejemplo, en la propuesta anticipada que contiene una proposición de espera de cinco años (cfr. art. 100.1 LC), a la que manifiestan su disposición a adherirse acreedores que, en conjunto representan la mayoría necesaria para su aceptación. En esa negociación, los acreedores exigirían la coincidente aprobación de un plan de viabilidad y la constitución de garantías. Satisfechas esas pretensiones, nos encontraríamos ante

una genuina refinanciación y ante la desaparición del estado de insolvencia. Exigir en ese escenario que se presente la solicitud de concurso es absurdo, sobre todo por haber desaparecido el presupuesto objetivo que abrió la fase prevista en el art. 5.3, pero que ha culminado con un acuerdo del que resulta que el deudor va a poder cumplir regularmente sus obligaciones.

21. Tan optimista hipótesis reclamará, en todo caso, una doble actuación del deudor. La primera, otro acuerdo extrajudicial correspondiente con aquellos acreedores *“no adheridos”*, objetivo nunca sencillo. La segunda actuación conduce a que del acuerdo extraconcursal con los acreedores quede constancia ante el Juzgado para conjurar el riesgo de que algún otro acreedor, hasta entonces no adherido, considere que transcurridos los plazos legales sin que se presente la solicitud de declaración concursal, se justifica que él presente su propia solicitud.
22. Quien quiera defender la aptitud del nuevo sistema para combinar soluciones como la descrita, encontrará un argumento notorio en la noticia que informaba de que una de las grandes compañías inmobiliarias, tras haber superado el debate sobre su declaración en concurso, ha decidido acogerse a la nueva vía abierta por el art. 5.3 LC. Parece que en esa decisión anida la esperanza de lograr un acuerdo de refinanciación que hasta ahora se ha resistido.

La reducción de las adhesiones a la propuesta anticipada que se acompaña a la solicitud de concurso

23. La ampliación del plazo para solicitar el concurso para aquel deudor que persiga presentar una propuesta anticipada de convenio se ve complementada con otras disposiciones introducidas en la Ley Concursal con la misma intención de facilitar esta solución. A esos efectos, nada impide aportar las adhesiones a una propuesta anticipada de convenio conforme al sistema precedente, es decir, al presentar la solicitud de concurso. Para que esta vía resulte más accesible, el art. 106 LC se ha

visto modificado en su apartado 1, al relajar el porcentaje exigido para poder presentar tal propuesta anticipada. Es una reducción sustancial, puesto que frente a la quinta parte del pasivo requerida anteriormente por el art. 106.1, se pasa a exigir sólo la mitad de ese porcentaje, siendo suficiente que el 10% del pasivo respalde dicha propuesta principal.

La ampliación del pasivo que autoriza adhesiones a la propuesta anticipada

24. Comencemos por subrayar el cambio en la definición del pasivo relevante a estos efectos. En la legislación modificada, la adhesión a la propuesta anticipada sólo podía ser concedida por los acreedores privilegiados y ordinarios. El nuevo art. 106.1 nos dice que las adhesiones pueden ser prestadas por acreedores de “*cualquier clase*”, lo que implica una modificación cualitativa determinante.

25. La interpretación de esta medida puede llevar a considerar que la expresión utilizada apunta a incluir en el porcentaje que contempla el citado precepto las adhesiones prestadas sobre la base de otra “*clase*” de créditos distinta de las que ya tenían reconocida esa facultad. Es decir, mientras que la dicción anterior del art. 106 LC incluía a los acreedores titulares de créditos ordinarios o privilegiados, la referencia del nuevo precepto sólo puede entenderse hacia la tercera clase de créditos que enuncia el art. 89 LC, es decir, se estarían convalidando las adhesiones fundadas en créditos que serían posteriormente calificados como subordinados, de los que serían titulares, por ejemplo, personas especialmente vinculadas con el deudor. Este entendimiento reforzaría de manera indiscutible la probabilidad de contar con una propuesta anticipada bien en el momento de solicitar el concurso o bien en los meses inmediatamente precedentes a la presentación de la correspondiente solicitud.

26. Sin embargo, la interpretación apuntada implicaría un cambio sustancial de nuestro sistema concursal, en el que los titulares de créditos subordinados no tienen reconocido el derecho de voto en la junta de acreedores (art. 122.1, 1º LC) y

tampoco se les reconoce la facultad de adherirse al convenio. ¿Cómo entender entonces el cambio del art. 106.1 LC?. En mi opinión, antes que como una ampliación a los acreedores subordinados del derecho de adhesión, el cambio introducido opera desde una perspectiva procesal. Al producirse esas adhesiones en un momento inicial del procedimiento concursal, en donde lo que importa al legislador es favorecer el uso de la propuesta anticipada y su admisión a trámite por el Juez, mucho más que la calificación precisa que a cada crédito corresponda y que pueda justificar o no esa adhesión, lo relevante es valorar el porcentaje del pasivo vinculado por tal declaración de voluntad. En este sentido, la amplitud de la nueva fórmula del art. 106.1 LC enlaza con la del art. 108 que permite formular adhesiones a la propuesta ya admitida a *“cualquier acreedor”*, lo que se entiende como una previsión limitada a los acreedores ordinarios y privilegiados, pero con independencia de cuál sea la calificación inicial que su crédito merezca. Para mejor explicarlo, basta con que pensemos en la adhesión de quien es dudoso que termine siendo acreedor titular de un privilegio o simple acreedor ordinario. En la certidumbre de la primera calificación, su adhesión para improbable. Sin embargo, podrá obtenerse esa adhesión en un momento inicial si resulta cuestionable tal calificación privilegiada.

Los efectos frente a los acreedores de la comunicación por el deudor de la negociación preconcursal

27. A los cambios en la legitimación ampliada y en los aspectos temporal y cualitativo de la propuesta anticipada, se suman los efectos que tiene la comunicación de la negociación con los acreedores frente a éstos. Me refiero al hecho de que la comunicación prevista en el art. 5.3 suspende la tramitación de ulteriores solicitudes de concurso. El art. 15.3 constituye un nuevo precepto que ordena al Juez, ante el anuncio de conversaciones con los acreedores, abstenerse de proveer cualquier solicitud de concurso, en tanto no se agote el plazo establecido en el art.

5.3 LC. Esa suspensión sólo se verá interrumpida cuando el deudor presente la solicitud de concurso.

La comunicación del art. 5.3 LC como solicitud de concurso voluntario

28. La comunicación al Juzgado de la existencia de negociaciones con los acreedores para obtener sus adhesiones a la propuesta anticipada cobra, una vez que se desemboca en el concurso, una especial relevancia. Como dice el art. 22.1, en su nuevo párrafo segundo, presentada esa comunicación nos encontramos con que ésta tiene el carácter de solicitud de declaración concursal. Esta solicitud se entiende que se produjo cuando se presentó aquella comunicación y ha de entenderse que es la fecha de tal presentación la que a todos los efectos legales se tendrá como fecha de la solicitud. Además, conllevará normalmente que el concurso tenga la consideración de voluntario (cfr. 22.1 LC) con lo que ello implicará previsiblemente para las facultades de administración y disposición del deudor (art. 40.1 LC).

Conclusión

29. Termino como empecé. Mirando hacia la legislación anterior y afirmando su inconveniencia y, por consiguiente, la justificación de reformar lo que no funcionó. Pero también debemos adivinar el futuro. El tiempo dirá si los cambios han sido acertados y la propuesta anticipada de convenio empieza a cumplir el fin que la LC la atribuyó. Ahora que se anuncian reformas venideras, creo que procede llamar a la prudencia, que en mi opinión aconseja que comprobemos si el nuevo modelo de la propuesta anticipada tiene una mayor acogida que el inicial –lo que parece, a priori, fácil- y no sometamos esa solución a una sucesión de reformas no contrastadas.

Madrid, 13 de mayo de 2009

Bibliografía específica sobre la propuesta anticipada de convenio

- ENCISO ALONSO-MUÑUMER, M. *La judicialización de los convenios extrajudiciales: la propuesta anticipada de convenio*, Madrid (2007).

“Operatividad práctica de la propuesta anticipada de convenio en el marco de las soluciones negociadas de las crisis económicas”, RCP 8 (2008), p. 455 y ss.

- FERNÁNDEZ RUIZ, J.L., “La propuesta anticipada de convenio en la Ley concursal”, RDM 251 (2004), p. 199 y ss.
- FONT SERVERA, J.M., “La propuesta anticipada de convenio”, RCP 3 (2005), p. 149 y ss.
- GALLEGO SÁNCHEZ, E., “La propuesta anticipada de convenio en la nueva Ley Concursal”, RJCIV 11 (2004), p. 127 y ss.
- JACQUET YESTE, T., “Contribución a la caracterización de la propuesta anticipada de convenio”, RCP 4 (2006), p. 227 y ss.
- ROJO, A., *El convenio anticipado*, Madrid (2004).